



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Demandante: HARRY ALBERTO PÉREZ GIL
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 010 2019 00255 01
Sentencia: S-180

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la codemandada PROTECCIÓN S.A., al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el 08 de noviembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

HARRY ALBERTO PÉREZ GIL demandó a PROTECCIÓN S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad de la afiliación efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por cuanto no se le proporcionó una información completa y

comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene a las costas y agencias en derecho a las dos demandadas.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 24 de junio de 1961, en agosto de 1995 se acercó una promotora de la AFP PROTECCIÓN S.A. a la empresa donde trabajaba y convocó a los empleados con la finalidad de que se trasladaran al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-, razón por la cual se trasladó a esa sociedad.

Manifiesta que en dicha asesoría les indicaron que podía pensionarse a cualquier edad, el valor de la mesada pensional del fondo privado sería superior a la que se reconocería en su momento por el Seguro Social, el Seguro Social se iba a liquidar y la pensión podía perderse. Que el fondo omitió explicarle las consecuencias adversas del traslado de régimen, información adecuada consistente en el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual con el fin de obtener una pensión anticipada, lo indujo en error.

Dice que el 18 de diciembre de 2018 PROTECCIÓN S.A. dio respuesta a su solicitud de simulación de la pensión de vejez en la que se observa que a la edad de 62 años quedaría pensionado por esa AFP con \$2.852.481 y en Colpensiones con una mesada pensional aproximada de \$7.616.640. Que en febrero de 2019 solicitó a COLPENSIONES el traslado de régimen el cual fue rechazado con el argumento que no era procedente por cuanto se encuentra a 10 años o menos del requisito de tiempo para pensionarse.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, dice que es cierta la fecha de nacimiento del demandante, así como la solicitud de traslado presentada por este ante esa entidad. Sobre los demás hechos, manifiesta que no le constan pues nada tienen que ver con COLPENSIONES. Se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentación fáctica y legal, debiéndose en todo caso absolver a COLPENSIONES de todo cargo y dolo que genere la ineficacia del traslado. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la nulidad de traslado de régimen pensional, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, la genérica.

A su turno, **PROTECCIÓN S.A.** dice que es cierta la fecha de nacimiento del demandante, la de afiliación a esa entidad el 03 de agosto de 1995 como traslado proveniente del Instituto de Seguros Sociales -ISS-, mediante formulario suscrito de manera libre, espontánea y sin presiones, precedido de una asesoría adecuada, correcta y suficiente por parte de esa AFP, afiliación que constituye un acto jurídico válido que produce efectos hasta la actualidad. Manifiesta que es cierto que al momento de vinculación la AFP PROTECCIÓN S.A. le explicó respecto a la posibilidad que existe en el RAIS de pensionarse de forma anticipada, explicándole sobre las formas en que se constituye la pensión en el RAIS. Niega que la AFP le haya manifestado al demandante que su mesada pensional sería superior que en el RPMPD, pues al momento de la asesoría se realizan las respectivas proyecciones pensionales verbales en ambos regímenes. Que el ISS se iba a acabar, pues era una idea generalizada. Se opuso a las pretensiones de la demanda exponiendo los argumentos antes esbozados.

Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento

indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, innominada o genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 12 de octubre de 2021 el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la INEFICACIA del acto por el cual se produjo el traslado del señor HARRY ALBERTO del ISS hoy COLPENSIONES a la AFP PROTECCIÓN S.A. En tal sentido, se entiende que el demandante ha permanecido afiliado al Régimen de Prima Media hoy administrado por COLPENSIONES, de manera permanente y sin solución de continuidad. ORDENÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES, todos los aportes que ha realizado el señor HARRY ALBERTO al riesgo de pensiones, existentes en su cuenta individual de ahorro pensional, junto con los rendimientos que se hubieren generado y las comisiones cobradas.

ORDENÓ a COLPENSIONES, reactivar la afiliación del señor HARRY ALBERTO, sin solución de continuidad, y una vez recibidos los recursos provenientes de la AFP PROTECCIÓN S.A., deberá validar su equivalencia en semanas de cotización, para efectos de atender el reconocimiento de las prestaciones económicas propias del sistema. CONDENÓ en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A. fijando como agencias en derecho el equivalente a 1 SMLMV.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con lo decidido, la apoderada de la codemandada PROTECCIÓN S.A. presenta recurso frente al traslado de los valores

correspondientes a las comisiones de administración y en lo que tiene que ver con el seguro previsional, manifiesta que no es precedente que se ordene la devolución de dichos conceptos toda vez que se trata de comisiones causadas durante la administración de los dineros de la cuenta de ahorro individual del demandante, descuentos realizados conforme a la ley como contraprestación de una buena administración. Con la condena de primera instancia que se ordena devolver el dinero que se encuentra en la cuenta del demandante, más los rendimientos generados y adicionalmente lo descontado por comisión de administración y seguro previsional se estaría constituyendo sin duda un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES, esto por recibir una comisión que ni siquiera está destinada a financiar la pensión de vejez del actor, estaría recibiendo un capital por una cuenta que nunca administró y adicionalmente ya se le estarían trasladando los rendimientos de una cuenta de ahorro individual.

Agrega que se debe tener en cuenta que si la consecuencia de la ineficacia de la afiliación es que las cosas vuelvan al estado anterior, en estricto sentido, el contrato de afiliación nunca existió, PROTECCIÓN S.A. nunca debió administrar los dineros de la cuenta de ahorro individual del demandante, estos rendimientos que se encuentran acreditados no se causaron y en este orden no existió un cobro de administración (artículo 1746 del Código Civil), con base en esto debe entenderse que, aunque se declare una ineficacia y se haga la ficción de que nunca existió un contrato de afiliación, no se puede desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras por parte de la AFP PROTECCIÓN S.A.

Frente al seguro previsional indica que ha sido girado a una aseguradora para que en caso de existir un siniestro de sobrevivencia o invalidez dicha compañía pague una suma adicional, esto con el fin de financiar las pensiones por esos conceptos, por lo tanto, la aseguradora termina siendo un tercero de buena fe que nada ha tenido que ver en el acto, razón por la cual tampoco es procedente la

devolución de estos dineros a COLPENSIONES. Por último refiere que para el cobro de esos conceptos opera el fenómeno de la prescripción, toda vez que son rubros que se van descontando en la periodicidad y no financian directamente la prestación económica de vejez del afiliado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión indicando que no son de recibo de esa entidad las consideraciones presentadas por el Juez de Primera Instancia por cuanto el demandante al momento de presentar la demanda en el año 2019 contaba con 58 años de edad, situación jurídica que lo deja inmerso dentro de la prohibición legal de traslado consagrada en el literal e del artículo 13 de la ley 100 de 1993, notificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003. Señala que el demandante en el desarrollo del proceso no demostró por ningún medio probatorio que ejerció de manera oportuna las acciones tendientes a regresar al Régimen de Prima Media.

Por otra parte, indica que la sentencia favorable a los intereses de la parte demandante desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, ya que la declaratoria de la ineficacia pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

Por último refiere que en caso de que se confirme la sentencia de primera instancia se ordene al fondo privado a trasladar debidamente actualizado el saldo de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, las cuotas de administración, los aportes al fondo de pensión de garantía mínima y las cuotas de seguro previsional, conforme a lo establecido en la sentencia SL 81989 de 2008, en la que se ordenó a los fondos privados incluso con cargo a su propio patrimonio la devolución de la totalidad de la cotización.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por la recurrente, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES con el objeto de salvaguardar sus intereses, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia de primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación del señor HARRY ALBERTO PÉREZ GIL realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que la AFP PROTECCIÓN S.A. queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se tiene que: *i)* HARRY ALBERTO PÉREZ GIL nació el 24 de junio de 1961 ; *ii)* se afilió al ISS el 11 de febrero de 1987; y *iii)* el 03 de agosto de 1995 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A., entidad en la que se encuentra afiliado actualmente.

Lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS, administrado en este caso por la AFP PROTECCIÓN S.A., y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras

de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que el afiliado no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de

información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Sin que tampoco sea de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993 –según fue mencionado por Colpensiones-, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *“... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el

aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

De otro lado, en cuanto a decisión del a quo de ordenar la devolución de todos los aportes que ha realizado el señor PÉREZ GIL al riesgo de pensiones, existentes en su cuenta individual de ahorro pensional, junto con los rendimientos que se hubieren generado y las comisiones cobradas tema cuestionado en el recurso de apelación por PROTECCIÓN S.A. así como la devolución de los porcentajes de seguros y reaseguros previsionales, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...).”

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos

producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, la decisión de primer grado deberá ser ACLARADA en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda igualmente con el traslado de las cuotas de administración, de los porcentajes de seguros y reaseguros previsionales y los aportes para garantía de pensión mínima, recibidos durante el tiempo que el señor HARRY ALBERTO PÉREZ GIL estuvo vinculado a esa entidad. Esto por cuanto se estima que, en la parte resolutive del fallo de primer grado, el funcionario judicial no fue preciso y concreto en este aspecto de la decisión.

Todo lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y

reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Ahora bien, no es procedente la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000 a favor del demandante.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el día 12 de octubre de 2021, pero la **ACLARA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda igualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, el valor recibido por concepto de cuotas de administración, los porcentajes de seguros y reaseguros, y

los aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a esa entidad.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000 a favor del demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b6118360527436af04e10f45755e09e88b451c81d6431514be8f2bd9ad32fce8**

Documento generado en 14/07/2022 11:34:27 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>